

De interés público:

Salud, educación, agua y saneamiento para todos

Resumen

‘Para nosotros fue un milagro que pusieran la educación primaria gratuita. De no haber sido así, John, de 11 años, estaría todavía en casa’.

Jane Nzomo, Kenya

‘La libertad se traduce en tener suministro de agua potable... poder vivir en una casa decente, tener un buen trabajo, tener acceso a la atención sanitaria. Lo que quiero decir es que ¿para qué sirve haber hecho esta transición si no se mejora la calidad de vida de esta gente? De lo contrario, ¡el voto es inútil!’

Desmond Tutu, 1999

Aulas con profesores, clínicas con enfermeras, agua corriente, servicios en funcionamiento: para millones de personas de los países en desarrollo es un sueño lejano. Pero estos servicios públicos esenciales –sanidad, educación, agua y saneamiento– son la llave para transformar la vida de las personas que viven en la pobreza.

Establecer unos buenos servicios públicos para todos no es una idea nueva: es la base sobre la que se han construido las sociedades de los países ricos de hoy en día. Más recientemente, otros países en desarrollo han seguido el ejemplo, con resultados impresionantes. Sri Lanka, Malaisia y el estado de Kerala, en la India, por ejemplo, han logrado en una generación avances en sanidad y educación que a los países industrializados les costó 200 años conseguir. Establecer unos buenos servicios públicos no es una idea nueva, pero se ha demostrado que funciona. Debe estar en el centro de los esfuerzos para hacer que la pobreza pase a la historia.

Es un escándalo que en el siglo XXI haya quien viva sin estos derechos humanos básicos; sin embargo, millones de familias todavía lo hacen. Hoy:

- 4.000 niños y niñas morirán a causa de la diarrea, una enfermedad debida al agua en mal estado
- 1.400 mujeres morirán innecesariamente durante el embarazo o el parto
- 100 millones de niños en edad escolar, la mayoría niñas, no irán a la escuela.

Este informe muestra cómo los países en desarrollo sólo conseguirán unas sociedades sanas y formadas si sus gobiernos asumen la responsabilidad de proporcionar los servicios esenciales. Las organizaciones de la sociedad civil y las empresas privadas pueden hacer contribuciones importantes, pero éstas deben estar reguladas e integradas de forma adecuada en sistemas públicos sólidos, y no ser vistas como un sustitutivo. Sólo los gobiernos pueden alcanzar la escala necesaria para proporcionar un acceso universal a los servicios que sea gratuito o fuertemente subsidiado para los pobres y dirigido a las necesidades de todos los ciudadanos, incluyendo las mujeres y las niñas, las minorías y los más pobres. Pero mientras algunos gobiernos han hecho grandes progresos, son demasiados los que carecen de los fondos, la capacidad o el compromiso para actuar.

Los gobiernos de los países ricos y las agencias internacionales como el Banco Mundial deben ser socios cruciales en el apoyo a los sistemas públicos, pero con demasiada frecuencia bloquean los avances al no proporcionar un alivio de la deuda y una ayuda predecible que pueda apoyar a los sistemas públicos. También obstaculizan el desarrollo al impulsar soluciones desde el sector privado que no benefician a los pobres.

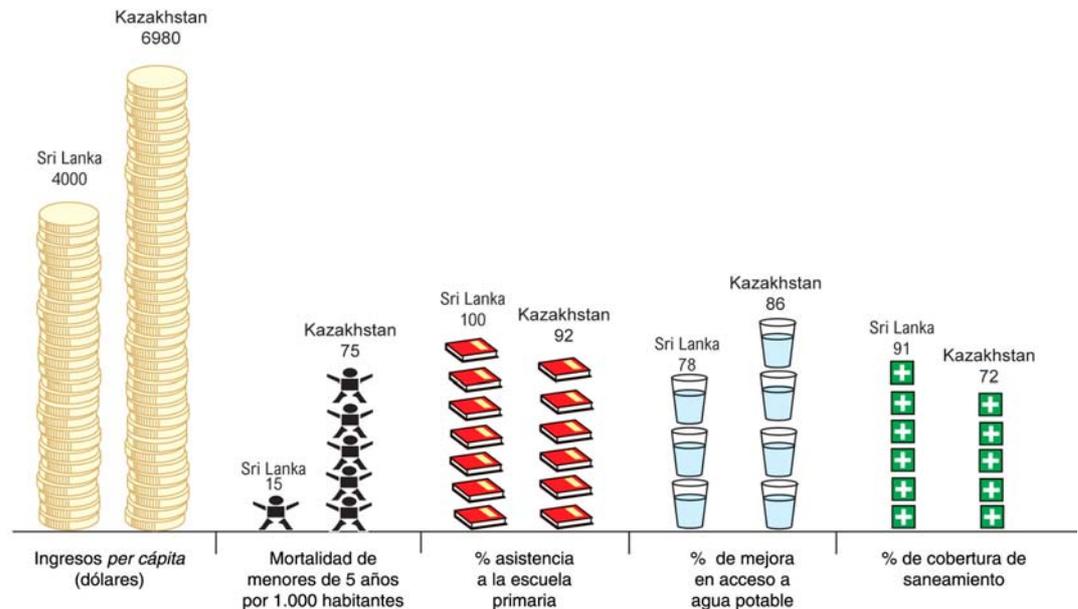
El mundo tiene capacidad para actuar. Los líderes mundiales han acordado un conjunto de objetivos internacionales conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Oxfam Internacional calcula que se requerirían 47.000 millones de dólares extra al año para alcanzar estos objetivos en sanidad, educación, agua y saneamiento. Se puede comparar esta cifra con el billón de dólares del gasto militar mundial anual o con los 40.000 millones de dólares que el mundo se gasta cada año en comida para mascotas.

Éxito público: gobiernos que garantizan unos servicios esenciales para todos

Oxfam Internacional ha diseñado un Índice de Servicios Esenciales para evaluar la actuación de los gobiernos de los países en desarrollo. Clasifica a los países en cuatro áreas sociales – tasas de supervivencia infantil, escolarización, acceso a agua potable y acceso a servicios sanitarios– y compara su actuación con el ingreso *per cápita* nacional. Esta comparación muestra que algunos gobiernos han actuado de forma continuada por encima de su posición. A pesar de que más de la tercera parte de la población de Sri Lanka todavía vive por debajo del umbral de la pobreza, su tasa de mortalidad materna está entre las más bajas del mundo. Una mujer de Sri Lanka cuando va a dar a luz tiene un 96% de posibilidades de ser atendida por una comadrona cualificada. Si ella o su familia necesitan tratamiento médico, pueden recibirlo gratuitamente en una clínica pública a la que pueden acceder andando desde su casa, y que está atendida por una enfermera cualificada. Sus hijos pueden ir gratis a la escuela primaria y la educación para las niñas es gratuita hasta el nivel universitario.

Comparando la situación con la de Kazakhstan, a pesar de que Sri Lanka tiene un 60% menos de renta per capita, un niño en Kazakhstan tiene casi cinco veces más probabilidades de morir en sus cinco primeros años de vida y es mucho menos probable que vaya a la escuela, que beba agua potable o que pueda utilizar una letrina (ver Gráfico 1).

Gráfico 1: Sri Lanka: menor renta que Kazakhstan, pero una población más sana y con mejor educación



Sri Lanka no es un caso único. Recientemente, Uganda y Brasil han doblado el número de niños escolarizados, han reducido a la mitad las muertes por SIDA y han extendido el acceso a agua potable y saneamiento a millones de personas. En el estado de Pulau Penang en Malaisia, la empresa pública de agua proporciona agua a más del 99% de la población y establece un precio subsidiado para los primeros 20.000 litros de agua utilizados por una familia cada mes.

Los gobiernos que han tenido éxito han logrado resultados proporcionando el acceso universal a servicios esenciales que funcionan para mujeres y niñas; aboliendo las tasas en sanidad y educación y subsidiando los servicios de agua y saneamiento; incrementando la capacidad pública a largo plazo para proporcionar estos servicios; expandiendo los servicios a las áreas rurales; invirtiendo en profesores y enfermeras; y fortaleciendo la posición social y la autonomía de las mujeres como usuarias y suministradoras de servicios.

Fracaso público — cuando los gobiernos no actúan

‘En el centro de salud se ponen de mala gana al atenderlo a uno, que si no tiene plata (dinero) no lo trasladan (?), si en ese momento usted no tiene ¿Qué le toca? Morirse’.

Marta María Molina Aguilar, madre de un niño enfermo, Nicaragua

Por cada Sri Lanka, hay otros países pobres en los que millones de personas no se pueden costear un médico, sus hijas no han ido nunca a la escuela, y sus casas no tienen ni grifos ni servicios. En Yemen, una mujer tiene sólo una oportunidad entre tres de aprender a leer y escribir. Si tiene un hijo, tiene una oportunidad entre cinco de que la atienda una comadrona. Si ella y su bebé sobreviven al parto, su hijo tiene una posibilidad entre tres de sufrir malnutrición y una entre nueve de morir antes de cumplir los cinco años. Si vive en un área rural, es improbable que su familia acceda a atención médica, agua potable o saneamiento básico.

Yemen ejemplifica también la profunda desigualdad entre sexos: normalmente los servicios no llegan a las mujeres y a las niñas. Sin embargo, invertir en el bienestar de las mujeres es la piedra angular del desarrollo, aumentando tanto sus oportunidades en la vida como las de sus hijos. En todo el mundo en desarrollo, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de caer enfermas, pero menos de recibir atención médica. Se espera que atiendan a los miembros de su familia que enferman, pero con frecuencia son las últimas en ser enviadas a la escuela y las primeras en abandonarla cuando hay escasez de dinero. Y son las niñas y las mujeres –casi siempre y en cualquier lugar– las que dedican buena parte del día a recorrer largas distancias cargadas con bidones de agua.

La realidad para la gran mayoría de los pobres en los países en desarrollo es que no hay servicios públicos, o que están orientados a las necesidades de los ricos, o que son demasiado caros para ellos, y esto conduce a la desigualdad social. En 89 de los 103 países en desarrollo los niños todavía tienen que pagar para ir a la escuela, lo que significa que muchos niños pobres se ven obligados a abandonar la educación. La mayoría son niñas. En un distrito de Nigeria, el número de mujeres que mueren en el parto se multiplicó por dos cuando se introdujo el pago de la atención sanitaria para las madres. Privados de suministro público de agua, los consumidores pobres tienen que comprarla a vendedores privados, gastando hasta cinco veces más por litro que los consumidores más ricos que disponen de tuberías de agua en sus casas. En muchos lugares, la corrupción es un problema importante, tanto en los proveedores privados como en los públicos. La corrupción y la ineficacia implican una cobertura desigual, falta de personal y el cobro de servicios de mala calidad.

Cuando existen servicios públicos, son mantenidos a flote por un personal reducido, mal remunerado y con sobrecarga de trabajo, y por profesores y personal sanitario infravalorados.

En los países menos desarrollados, los salarios de los profesores se han reducido a la mitad desde 1970. Y no es fácil encontrar suficientes héroes del sector público. Para proporcionar atención sanitaria y educación básicas para todos, el mundo necesita 4.250.000 profesionales sanitarios más y 1.900.000 profesores experimentados más.

Cuando sus gobiernos no proporcionan servicios, la mayoría de los pobres no tienen acceso a ningún tipo de educación, atención sanitaria, agua potable o saneamiento. Los que lo tienen es a costa de quedarse en la bancarrota para pagar servicios privados o gracias a que se les facilitan sectores de la sociedad civil como mezquitas, iglesias, organizaciones benéficas y grupos comunitarios. Estos llegan a comunidades remotas y marginadas y proporcionan servicios basados en la comunidad, por ejemplo, la atención domiciliaria a enfermos de SIDA que se ha desarrollado en países de África fuertemente afectados como Malawi. En muchos países, es una práctica común el suministro informal de atención sanitaria y educación a través de redes locales, que a menudo dependen del trabajo no remunerado de mujeres, sobre todo para grupos marginados y vulnerables.

Las organizaciones de la sociedad civil también pueden desarrollar y promover enfoques innovadores para proporcionar servicios, y apoyar a los ciudadanos en la reclamación de sus derechos a la salud, la educación y el agua. Pero su alcance es parcial, es difícil aumentar la escala de sus servicios y la calidad puede variar mucho. En Zambia, por ejemplo, las comunidades se han unido para construir escuelas, pero algunas de ellas carecen incluso del material educativo más básico y de saneamiento. La evidencia muestra que este tipo de iniciativas ciudadanas funcionan mejor cuando están integradas en un sistema público, y su contribución es formalmente reconocida y apoyada por el gobierno. En el estado de Kerala en la India, en Malaisia y en Barbados, los gobiernos han tendido puentes con la sociedad civil, financiando por ejemplo los costes de funcionamiento de escuelas de la iglesia, a las que supervisan regularmente para mantener los estándares.

Si el estado no funciona, el mercado no es la solución

Ante la falta de servicios estatales, muchos han mirado al sector privado en busca de respuestas. En algunos casos ha funcionado. Países como Corea del Sur y Chile han logrado impresionantes mejoras en el bienestar con niveles altos de implicación privada en el suministro de servicios. Pero estos servicios son propensos a grandes desigualdades y elevados costes y a menudo los más pobres quedan excluidos porque no pueden permitírselos, puesto que es notablemente difícil regular al sector privado. Las soluciones dirigidas por el mercado con frecuencia han socavado el suministro de servicios esenciales y han tenido un impacto negativo en las comunidades más pobres y vulnerables. El ejemplo más destacado es la privatización del agua, pero en los países en desarrollo también se está expandiendo rápidamente la participación en la atención sanitaria de un sector privado escasamente regulado.

- Cuando China desmanteló la atención sanitaria pública gratuita en favor de hospitales que obtienen beneficios y seguros sanitarios, los costes en sanidad de las familias se multiplicaron por 40 y los avances para hacer frente a la mortalidad infantil se ralentizaron. Servicios que antes eran gratuitos son ahora pagados a través de seguros sanitarios, que sólo dan cobertura a una de cada cinco personas en la China rural.
- Chile fue uno de los primeros países en implantar la participación del sector privado en su sistema de salud. También tiene el índice más alto de nacimientos por cesárea del mundo (40% en 1997), en gran medida debido a que los hospitales privados buscan maximizar sus beneficios con los costes extra de la cirugía y la mayor ocupación de las camas hospitalarias.
- Para estados débiles puede ser más difícil regular a los proveedores privados, en especial a las poderosas compañías multinacionales, que proporcionar directamente

los servicios. El mercado mundial del agua está dominado por un puñado de empresas de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, como Bechtel, Suez y Biwater: a menudo los contratos que negocian priorizan los segmentos más rentables del mercado, requieren márgenes de beneficios garantizados y se realizan en dólares. Si los gobiernos tratan de finalizar estos contratos, se arriesgan a ser demandados, como se ha demostrado en los casos recientes de Tanzania y Bolivia.

Países ricos: promocionando al sector privado, rompiendo las promesas de ayuda y quitando enfermeras y profesores de los países en desarrollo

Los gobiernos de los países ricos y las agencias internacionales como el Banco Mundial pueden tener una influencia importante en las políticas que adoptan los países pobres. Para algunos de los países más pobres, la ayuda de los donantes equivale a la mitad de su presupuesto nacional. El asesoramiento de expertos externos, financiados por la ayuda, tiene una gran influencia a la hora de determinar el tipo de reformas que adopta un gobierno.

Con demasiada frecuencia, en lugar de ayudar a instaurar servicios públicos, los gobiernos de los países ricos y las agencias como el Banco Mundial utilizan su influencia para promover soluciones del sector privado ante las carencias de los servicios públicos. Ven en la creciente implicación del sector privado la llave para aumentar la eficiencia y mejorar los servicios, pero cada vez son más las evidencias que muestran que estas soluciones raramente funcionan en beneficio de los pobres. A menudo el Banco Mundial y el FMI insisten en que los gobiernos introduzcan la privatización y aumenten el suministro de servicios por el sector privado a cambio de ayuda o de cancelación de deuda. Un estudio realizado en 2006 de 20 países receptores de préstamos del Banco Mundial y del FMI, encontró que la privatización fue una condición en 18 de ellos, un aumento si se compara con años anteriores.

Lo que *necesitan* los gobiernos de los países pobres es una ayuda bien coordinada, predecible y canalizada a través de sistemas públicos y presupuestos nacionales. Lo que normalmente *obtienen* es una ayuda insuficiente e impredecible, desembolsada a través de una maraña de diferentes proyectos que compiten directamente con los servicios públicos por un personal y unos recursos escasos. Hasta un 70% de toda la ayuda que se destina a educación se gasta en asistencia técnica, buena parte de ella para consultores occidentales muy bien pagados. Un estudio de la asistencia técnica en Mozambique encontró que los países ricos estaban gastando 350 millones de dólares al año en expertos técnicos, mientras que todo el presupuesto para salarios del sector público de Mozambique ascendía a tan sólo 74 millones de dólares. En sanidad, las demandas de los donantes de múltiples iniciativas ‘verticales’ diferentes hace perder el tiempo a los funcionarios, duplica y socava el gasto y distorsiona las prioridades sanitarias. A Angola y República Democrática del Congo, por ejemplo, se les ha requerido establecer a cada uno cuatro organismos distintos de ‘coordinación’ para el VIH/SIDA.

La imposición por parte del FMI de techos para las contrataciones y los salarios en el sector público impiden a los gobiernos ampliar los servicios de salud y educación. Aunque el FMI tiene razón en que los países deben gestionar sus economías cuidadosamente, su posición excesivamente rígida es incompatible con el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en salud, educación, agua y saneamiento. La Organización Mundial del Comercio y los ‘Acuerdos de Libre Comercio’ bilaterales y regionales también pueden amenazar los servicios públicos al limitar la regulación por parte de los gobiernos de los proveedores extranjeros de servicios.

Al mismo tiempo que urgen a los países en desarrollo a que alcancen los ODM en salud y educación, los países ricos están agravando sus carencias de personal cualificado al quitarles a miles de sus trabajadores clave. De los 489 estudiantes de enfermería que se graduaron en la

Escuela Médica de Ghana entre 1986 y 1995, el 61% han abandonado el país, de ellos más de la mitad han ido al Reino Unido y una tercera parte a Estados Unidos.

Qué tiene que ocurrir

El cambio es posible, pero requerirá de la acción concertada de los gobiernos de los países en desarrollo, apoyados, y no socavados, por los países ricos, y teniendo que rendir cuentas a ciudadanos activos que demanden sus derechos.

Cambiar la agenda política

Compromiso político y voluntad de reforma son claves para que los servicios funcionen, y para ello los gobiernos tienen que sentir la presión. Se les debe presionar para que gasten más en servicios esenciales y para que lo gasten mejor. En el estado de Kerala en la India y en Sri Lanka, ciudadanos políticamente concienciados han demandado servicios que funcionen bien. En todo el mundo, organizaciones de la sociedad civil están colocando el debate sobre los servicios esenciales en la prensa y en las listas de prioridades de los políticos. En Kenya la coalición nacional de grupos de educación, Elimu Yetu ('Nuestra Educación') jugó un papel clave para que la educación primaria gratuita fuera un tema central en las elecciones, asegurando su introducción en 2002; el resultado fue que 1.200.000 niños fueron a la escuela por primera vez. En 2005 se formó la mayor coalición contra la pobreza de la historia, la Llamada Mundial de Acción Contra la Pobreza. Han participado más de 36 millones de personas en más de 80 países. Sus demandas centrales incluyen servicios públicos universales de calidad para todos, y acabar con la privatización cuando origina privación y pobreza.

Hacer que los servicios funcionen para las mujeres

Invertir en servicios esenciales que refuercen y potencien el papel de mujeres y niñas, significa promover la incorporación de la mujer al trabajo, apoyarlas como usuarias de estos servicios, protegerlas de los abusos y combinar todas estas medidas con reformas legales que mejoren su estatus y su autonomía en la sociedad. En Botswana, Mauricio, Sri Lanka, Costa Rica y Cuba, la elevada proporción de mujeres entre los profesores y profesionales sanitarios contribuyó a promover el uso de los servicios por parte de las mujeres y las niñas. A menudo, los avances se logran trabajando con grupos de mujeres, cambiando las leyes y haciendo frente a las creencias perjudiciales de forma simultánea. En Brasil, el trabajo de las organizaciones de mujeres dentro y fuera del gobierno aseguró que en la Constitución de 1988 se reflejara la importancia de la salud reproductiva de las mujeres. Los movimientos de mujeres han seguido influyendo en la política sobre salud pública del país: se ha establecido un programa integrado de salud femenina (Programa de Asistencia a Saude da Mulher – PAISM) y ahora hay servicios sanitarios especiales para las mujeres víctimas de violaciones.

Afrontar la crisis de mano de obra

'Mientras haya aliento en mi cuerpo, seguiré enseñando. No lo hago por la paga sino porque me encanta mi trabajo y me encantan los niños'.

Viola Shaw-Lewis, profesora de 76 años, escuela pública de Kingsville, Liberia

Los trabajadores del sector público deben ser vistos como los héroes que son, y situados en el centro de la expansión de los servicios para todos. Todos los países que han tenido éxito han construido un carácter distintivo de servicio público, en el que se estimula a los trabajadores a que se sientan orgullosos de su contribución a la nación, y se pide a la sociedad que les otorgue estatus y respeto.

El sueldo por sí sólo no siempre aumenta la motivación, pero es la primera prioridad cuando los ingresos son demasiado bajos. La mejora salarial debe ir unida a unas mejores condiciones

de trabajo. La vivienda es un tema importante para la mayoría de los profesores, sobre todo para las mujeres que enseñan en las áreas rurales. Los gobiernos deben trabajar con los sindicatos para mejorar los salarios y las condiciones de trabajo, combinando ambos con códigos de conducta para asegurar que los profesores hacen su trabajo.

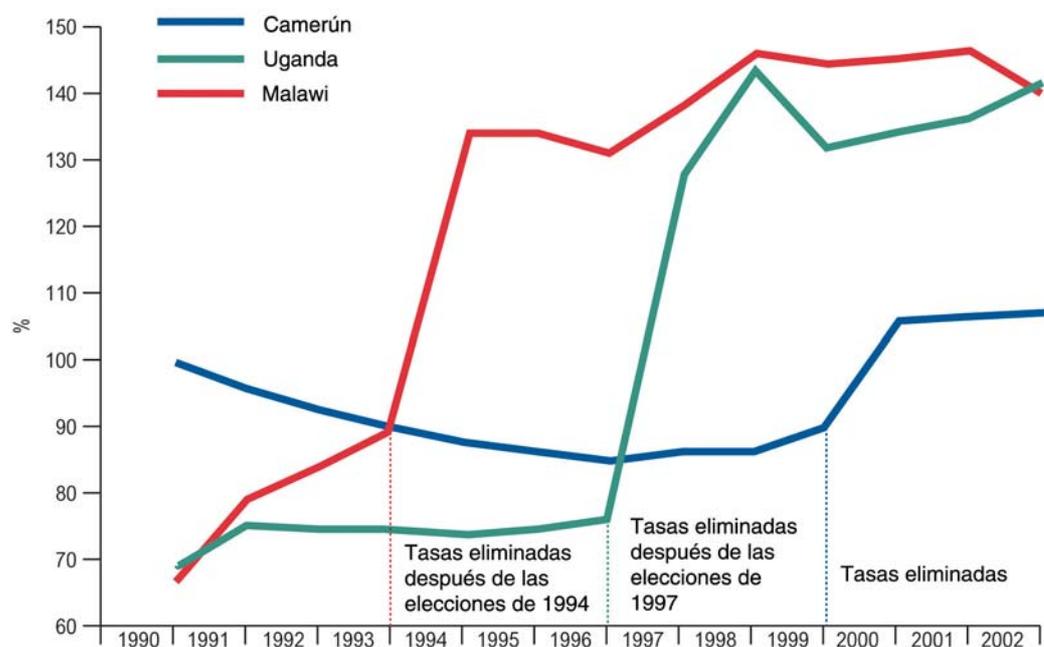
Aumentar de manera significativa el número de profesores y profesionales sanitarios es una tarea de grandes dimensiones que requiere una planificación estratégica coordinada entre los gobiernos de los países pobres y los donantes. Los gobiernos deben invertir en planificadores y gestores competentes para elaborar y poner en marcha planes claramente presupuestados. En Malawi, los donantes están financiando una subida salarial para los profesionales sanitarios del sector público, para frenar la oleada de médicos y enfermeros que se van a otros países y mejorar la calidad de la atención en los hospitales.

Luchar contra la corrupción y construir responsabilidad

En muchos casos, la mejora de salarios, estatus y condiciones para los trabajadores del sector público contribuye a reducir la corrupción a pequeña escala. Servicios educativos públicos sólidos y campañas de concienciación pueden jugar un papel importante para promover en la sociedad en su conjunto una cultura de confianza, honestidad y respeto por la legalidad. También se debe hacer frente a la corrupción a nivel político. La democracia multipartidista y la emergencia de la sociedad civil y de una prensa libre están resultando centrales en esta lucha. En Costa Rica y en Kenya, por ejemplo, los escándalos en la prensa han llevado a la persecución de funcionarios de alto nivel.

La sociedad civil también está jugando un papel cada vez más importante para exigir responsabilidades a los líderes políticos, haciendo un seguimiento de los gastos gubernamentales en servicios esenciales y llamando la atención sobre los casos en los que desaparece dinero. Es necesario que se reconozca formalmente el papel de los ciudadanos en la supervisión pública. Water Aid ha establecido mecanismos de información entre los grupos de usuarios del agua y los gobiernos locales en Nepal, India, Bangladesh, Ghana y Etiopía. En Malawi grupos sobre educación hacen un seguimiento del gasto gubernamental en la enseñanza primaria. La red internacional Social Watch reúne a grupos ciudadanos en más de 60 países para supervisar de forma regular la actuación de sus gobiernos en la provisión de servicios esenciales.

Gráfico 2: Eliminar las tasas permite llevar a niños y niñas a la escuela y situar la educación en la agenda



Eliminar el pago de tasas por parte del usuario en la enseñanza primaria (ver gráfico 2), y en la atención sanitaria básica puede tener un impacto inmediato en la utilización de los servicios. Para el agua, de la que nadie puede prescindir, la cuestión es mejorar el acceso para los pobres y asegurar que un recurso limitado es compartido de forma equitativa. Los costes se deben estructurar por tanto de manera que se asegure que una cantidad mínima diaria es gratuita o tiene un precio asequible para los pobres.

Los países ricos deben apoyar los servicios públicos

Los países ricos deben apoyar a los gobiernos de los países en desarrollo y a sus gentes en la puesta en marcha del tipo de medidas que se han descrito más arriba. Tienen que dejar de ignorar y de minar a los gobiernos con su impulso a la expansión de la provisión de servicios por parte del sector privado. Deben cumplir el compromiso que hicieron hace ya 36 años de destinar el 0,7% de sus ingresos a la ayuda al desarrollo. Esta ayuda debe ser a largo plazo, predecible y dirigida a los países que demuestren su compromiso para aumentar la cobertura de los servicios sociales esenciales de calidad. Debe centrarse especialmente en pagar los salarios y los costes de funcionamiento de los sistemas públicos, a través de apoyos sectoriales y presupuestarios siempre que sea posible. Esto se debe apoyar con la total cancelación de la deuda para todos los países pobres que lo necesiten. Los gobiernos ricos también deben reducir el reclutamiento activo de profesionales de países pobres para trabajar en los servicios sanitarios y educativos de los países ricos.

Conclusión

Es la primera vez en la historia que una generación tiene en sus manos la posibilidad de llegar a conseguir que todos los niños y niñas del mundo puedan ir a la escuela, que todas las mujeres puedan dar a luz con las mayores posibilidades de que ni ellas ni sus bebés mueran, que todo el mundo pueda beber agua sin poner en riesgo su vida, que millones de nuevos profesionales sanitarios y educativos puedan estar salvando vidas y formando mentes.

Sabemos cómo llegar a ello: liderazgo político, acción gubernamental y servicios públicos apoyados por una ayuda flexible y a largo plazo de los países ricos, y por la cancelación de la deuda. Sabemos que el mercado sólo no puede hacerlo. La sociedad civil puede colocar algunas de las piezas, pero los gobiernos tienen que actuar. No hay atajos, y no hay otro camino.

Para alcanzar estos objetivos, los gobiernos de los países en desarrollo deben cumplir sus responsabilidades, sus ciudadanos deben presionarles para que lo hagan y los países ricos deben apoyarles y no minarles. En palabras de Nelson Mandela:

'La pobreza no es algo natural. Es creada por el hombre y puede ser vencida y erradicada por las acciones de los seres humanos. Vencer la pobreza no es un gesto de caridad. Es un acto de justicia. Es la protección de un derecho humano fundamental, el derecho a la dignidad y a una vida decente. Mientras persista la pobreza no habrá libertad'. **Discurso en el lanzamiento de la campaña *Make Poverty History*, Trafalgar Square, 3 de febrero de 2005**

Recomendaciones

Los gobiernos de los países en desarrollo tienen que:

- Realizar inversiones sostenidas en sistemas y servicios esenciales de educación, atención sanitaria, agua y saneamiento. Deben hacer especial énfasis en las políticas preventivas de salud reproductiva y en combatir activamente la pandemia del VIH/SIDA.
- Eliminar el pago de la educación y la atención sanitaria básicas, y subsidiar el agua para los pobres.
- Promover la equidad haciendo que los servicios funcionen para las mujeres y para las niñas y mejorando su estatus social.
- Trabajar con la sociedad civil y con el sector privado dentro de un sistema público único e integrado.
- Formar, reclutar y retener los profesores y profesionales sanitarios que tan necesarios son.
- Mejorar los salarios y las condiciones de los trabajadores ya existentes.
- Construir un carácter distintivo de servicio público, en el que se estimule que los trabajadores públicos y de los servicios esenciales se sientan orgullosos de su contribución.
- Asegurar la representación y supervisión ciudadana en el control de los servicios públicos y facilitar la participación de la sociedad civil en los procesos locales y nacionales de planificación y elaboración de presupuestos.
- Posicionarse y actuar contra la corrupción.

Los países ricos, el Banco Mundial y el FMI tienen que:

- Dejar de impulsar inapropiadas reformas de mercado para los servicios públicos a través de la condicionalidad de la ayuda, el asesoramiento técnico y los acuerdos comerciales.
- Mantener su promesa de destinar el 0,7% de su renta nacional para la ayuda al desarrollo y asignar al menos el 20% de esa ayuda a servicios básicos.
- Cumplir los compromisos internacionales de mejorar la calidad de la ayuda, incluyendo los compromisos de París sobre la efectividad de la ayuda. Asegurar que la ayuda es coordinada, predecible y a largo plazo, incluyendo una mayor cancelación de la deuda y el aumento del apoyo sectorial y presupuestario.
- Apoyar económicamente la eliminación del coste para el usuario de la educación y la atención sanitaria básicas, y el subsidio del coste del agua para los pobres.
- Financiar completamente el Fondo Global de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria y la Iniciativa por Vía Rápida de Educación para Todos, asegurando que apoyan a los gobiernos y a los sistemas públicos, en lugar de duplicar sus actividades.
- Trabajar con los países pobres para reclutar, formar y retener 4.250.000 nuevos profesionales sanitarios y 1.900.000 profesores, e invertir en la formación del personal de

las instalaciones públicas y de los gobiernos locales responsables de los servicios de suministro de agua y saneamiento.

- Reducir el reclutamiento activo de personal sanitario y de otros profesionales de los países pobres.

La sociedad civil tiene que:

- Actuar junta para exigir servicios públicos de calidad, incluyendo atención sanitaria y educación gratuitas, y el subsidio de los servicios de agua y saneamiento.
- Continuar construyendo movimientos populares mundiales para exigir la actuación de los gobiernos, tales como la Campaña Mundial por la Educación, la Llamada Mundial de Acción Contra la Pobreza y los movimientos de mujeres.
- Involucrarse en procesos locales y nacionales de planificación.
- Trabajar con los parlamentos nacionales en la supervisión del gasto presupuestario, para asegurar que los servicios lleguen a los más pobres y que no se tolera la corrupción.
- Hacer frente a los gobiernos de los países ricos, al Banco Mundial y al FMI cuando no den su apoyo a los servicios públicos.
- Trabajar estrechamente con los gobiernos y con otros proveedores no estatales para asegurar la creciente innovación, aprendizaje, cooperación y responsabilidad en el suministro de los servicios esenciales.